



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Cofepris
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios

W. Rocas 267 468 256
Mesa 5

CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL
CÓDIGO DE
COPIA DE LA
CÓPIA DE LA
CÓPIA DE LA

Quejoso: **DESART MX, S.A. DE C.V.** ✓

Expediente número: [REDACTED]

Asunto: **Se rinde informe justificado**

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019.

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Edificio Sede Del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, Eduardo Molina No. 2, Acceso 9, nivel Plaza del Parque, Ciudad de México, C.P. 15960.
PRESENTE

Mónica Tellez Estrada, en mi carácter de **Subdirectora Ejecutiva de Normatividad** adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (en lo sucesivo la Cofepris), en suplencia por ausencia del Coordinador General Jurídico y Consultivo, y este en representación del **Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios** y del **Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Cofepris**, autoridades señaladas como responsables en la demanda dentro del juicio citado al rubro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley de Amparo; 1; 4, fracción II, inciso g; 11, fracción XI, 18, fracciones I, VI, VIII, IX y 21 último párrafo del Reglamento de la Cofepris, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2004 y artículo Quincuagésimo Quinto fracción IV, del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril del 2010, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Cofepris, ubicada en **Avenida Marina Nacional No. 60, Colonia Tacuba, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, código postal 11410, en esta Ciudad de México**, y designando en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo designo como delegados de las autoridades en cuya ausencia represento, a los Licenciados en Derecho [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED], así como a los pasantes de la Licenciatura en Derecho los C.C. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], ante usted comparezco y expongo:

En legales tiempo y forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, rindo el **informe justificado** requerido por su Señoría, lo que hago en los términos siguientes:

CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS

1.- SON CIERTOS los actos que se reclaman al **COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS** consistentes en:



2019
AÑO DEL CENTENARIO DEL GOBIERNO
DE EMILIANO ZAPATA

1014

Con firma autógrafa
de los señores
una copia del informe



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Cofepris

Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios

"...la expedición de los Lineamientos para el Control Sanitario de la Cannabis y derivados de la Misma (en adelante Lineamientos o Lineamientos de la COFEPRIS) emitidos el pasado 30 de octubre de 2018, específicamente, se reclaman los artículos 5, 6, 24, 35, 42, 43, 44, 44, 46 y 48."

2.- SON CIERTOS los actos que se reclaman al **SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS** consistentes en:

"...la emisión y expedición del oficio número 183300EL040837, de fecha 17 de diciembre de 2018 y notificado a mi representada el 7 de enero de 2019..."

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

PRIMERO.- Se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción V del artículo 63 en relación con el artículo 61 fracción XVI mismos que determinan:

"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

...

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

...

XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;"
(Sic)

Tal y como se aprecia, de los dispositivos transcritos se desprende que el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que cuya violación pueda ser reparada con el otorgamiento del amparo, es decir, que tenga forma de restituir en el goce de la garantía violada. De ahí que si la demanda de amparo lo es en contra de la emisión de los Lineamientos en materia de Control Sanitario de la Cannabis y derivados de la misma, resulta improcedente el juicio intentado, pues es lógico, que dicha emisión fue realizada con el objetivo de regular en materia de control sanitario de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, con fines médicos y científicos, y criterios sanitarios para la comercialización, exportación e importación de productos con amplios usos industriales, que contengan derivados de la Cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC.

En tales condiciones se tiene que el acto del cual se duele el impetrante de garantías se trata de un acto consumado, por lo que el acto reclamado que plantea la quejosa, ya fue realizado, de modo que de ninguna manera pueden retrotraerse los efectos del citado acuerdo de lineamientos, por lo tanto, dicho acto quedó **consumado de modo irreparable**, porque materialmente ya fue ejecutado y no sigue generando efectos, pues su ejecución fue instantánea.



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Cofepris

Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios

268

257

No debe de pasar desapercibido para su Señoría que en el supuesto de conceder el amparo contra el acto reclamado, no cabría la posibilidad de reparar el daño, puesto que como se ha venido referido en la presente causal de improcedencia, dichos Lineamientos en materia de Control Sanitario de la Cannabis y derivados de la misma ya fueron realizados, pero se insiste los mismos se realizaron con el objetivo de regular en materia de control sanitario de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, con fines médicos y científicos, y criterios sanitarios para la comercialización, exportación e importación de productos con amplios usos industriales, que contengan derivados de la Cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC.

Ahora bien, precisamente para evitar el abuso del Juicio de Amparo, la ley de la materia previó diversas hipótesis que provocan el sobreseimiento o cese del juicio en aquellos casos en los que no existe posibilidad restituir al quejoso el goce de la garantía violada o han sido ejecutados y consumados de manera irreparable y han cesado sus efectos, tal y como lo señala la siguiente tesis jurisprudencial:

"Séptima Época

Registro: 249975

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

163-168 Sexta Parte

Materia(s): Común

Tesis:

Página: 14

ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.

Por consumados de un modo irreparable deben entenderse aquellos actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías, situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante la restitución del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las cuales fue lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno."

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 613/81. Guadalupe Espinoza Hernández. 27 de agosto de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretaria: María de los Ángeles Pombo Rosas.

Y la siguiente aplicada de forma análoga:



2019
AÑO DEL ANGELO DEL AÑO
EMILIANO ZAPATA



Séptima Época
Registro: 254735
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
75 Sexta Parte
Materia(s): Común
Tesis:
Página: 16

ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO.

Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 12/75. Félix Hernández Castillo. 31 de marzo de 1975.
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Franco.

Nota: En el Informe de 1975, la tesis aparece bajo el rubro "AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. CESACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS E IRREPARABILIDAD DE LOS MISMOS."

Todo eso pone de manifiesto que el juicio de amparo que se tramita ha quedado sin materia, pues el acto que en esencia reclama la quejosa, han sido ejecutados de manera irreparable, por lo que deberá decretarse el sobreseimiento

SEGUNDO.- Se advierte la actualización de la causal de improcedencia consagrada en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por la que debe sobreseerse el en términos de la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita.





La fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo establece que procede el sobreseimiento del juicio, entre otras causas, por la actualización o superveniencia de algunas de las causales de improcedencia del juicio previstas en el artículo 61, antes citado. Éste último dispositivo ordena en su fracción XII que el juicio de amparo es improcedente *"Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley..."*.

A lo anterior, primeramente se debe partir de la concepción que se tiene por los términos anteriormente mencionados, por lo que se entiende por interés jurídico como un derecho público subjetivo consistente en la facultad de un sujeto (gobernado) para exigir de otro (Estado) una acción u omisión concreta, protegida directamente por el derecho objetivo.

Para la configuración de dicho interés se requiere: a) la existencia de un derecho establecido en una norma jurídica, b) la titularidad de ese derecho por parte de una persona, c) la facultad de exigencia para el respeto de ese derecho, y d) la obligación correlativa a esa facultad de exigencia.

En otras palabras, el interés jurídico se considera como la facultad de un particular para exigir del Estado una determinada conducta que se traduce en un hacer, un dar, o un no hacer, protegida por el derecho objetivo en forma directa.

Sin embargo, para que la conducta positiva o negativa sea exigible por un gobernado al Estado, es necesario que el derecho objetivo haya sido instituido con la intención de dar satisfacción a intereses particulares, esto es, que quien pretenda el cumplimiento de la obligación tenga personalmente interés de exigirla, siendo además necesario que tal sujeto sea el titular de esos intereses particulares; de suerte que el gobernado sólo tendrá legitimación para acudir al juicio de amparo cuando la norma jurídica objetiva establezca a su favor alguna facultad de exigir.

Por otra parte, el interés legítimo precede de la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria a la administración pública, sin que a dicha obligación le corresponda un derecho subjetivo ya que, puede haber gobernados para los que la observancia o no de este tipo de normas de la administración pública resulte una ventaja o desventaja de modo particular respecto a los demás, ello puede ser a consecuencia de la particular posición de hecho en que uno o algunos ciudadanos se encuentren, que los hace más sensibles que otros frente a determinado acto administrativo, o bien, puede ser el resultado de que ciertos particulares sean los destinatarios del acto de autoridad que se controvierte.

Las características que permiten identificar al interés legítimo son: a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante; b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo; c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular; d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho; e) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante; f) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado.



Aunado a lo anterior no debe perderse de vista lo establecido en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo que establece "El interés simple, en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo..."

Por lo anterior se hace mención de las siguientes jurisprudencias:

"Semanario judicial de la federación, octava época, tomo vi, julio-diciembre de 1990, segunda parte-I, p. 364. **INTERES JURÍDICO. EN QUE CONSISTE.** El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la constitución general de la república, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1908

INTERÉS LEGÍTIMO. EN QUÉ CONSISTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El interés legítimo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, consiste en el poder de exigencia con que cuenta un sujeto, que si bien no se traduce en un derecho subjetivo, permite reconocerle la facultad de impugnar la actuación o la omisión de una autoridad en orden a la afectación que ello le genera, al no acatar lo previsto por determinadas disposiciones jurídicas que le reportan una situación favorable o ventajosa. Dicho en otras palabras, es la pretensión o poder de exigencia que deriva de una lesión o principio de afectación a la esfera jurídica de un gobernado, generada por un acto de autoridad y sus consecuencias, cuya anulación o declaratoria de ilegalidad trae consigo una ventaja para éste, por hallarse en una situación especial o cualificada.

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1391

INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SUS CARACTERÍSTICAS. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera



jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa."

(Sic)

Lo anterior es así, en razón a que el impetrante de garantías, habiendo aducido un interés legítimo para obtener el amparo, no acredita éste, además de no demostrar la afectación jurídica, personal ni directa, entendido como la existencia de un menoscabo u ofensa que recae y se concreta en una persona física o moral determinada y que, sin ser necesariamente patrimonial, sea apreciable objetivamente y consista en una afectación real, no subjetiva, cuya realización sea pasada, presente o inminente, no simplemente eventual, aleatoria o hipotética; así como la especial situación en que se encuentre frente al orden jurídico, atento a los artículos 4 de la Ley de Amparo y 107, fracción I Constitucional, es decir, no acredita ante ese insigne Juzgado federal, por una parte, un interés jurídico tutelado en la norma, que demuestre la afectación a que se refiere con la emisión del acto omisivo que reclama a esta autoridad, pues ese acto, al tener tal naturaleza implica que ese dejar de actuar de parte de la autoridad trae una consecuencia jurídica prevista en la norma y que afecta de manera personal y cierta en la forma que describe el quejoso. Es de apoyo la tesis que a continuación se cita así como los mencionados numerales:

"INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.

De acuerdo con el sistema consignado en la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, es oportuno destacar que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas.

Amparo en revisión 4767/71. Pablo Murillo Mercado. 10 de abril de 1973. Unanimidad de 18 votos. Ponente: Abel Huitrón y A.

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 52 Primera Parte. Pág. 46. Tesis Aislada."

(Énfasis propio)

(Sic)

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos:

"Artículo 107. *Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los*





procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

II.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

Ley de Amparo:

"Artículo 4o.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos de esta Ley.

..." (Énfasis propio)

Por otro lado, el quejoso habiendo aducido el interés legítimo para solicitar el amparo, en primer término no ha demostrado el agravio que le ocasiona el acto omisivo reclamado, ni mucho menos ha acreditado fehacientemente el interés legítimo que ostenta, pues de la apreciación de la demanda de amparo es patente que no contempla la totalidad de los elementos necesarios para que adquiera la eficacia jurídica necesaria, misma que prevé la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y que el promovente demuestre pertenecer a esa colectividad; atento a lo cual cobran especial aplicación los siguientes criterios:

"INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la



existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.

Época: Décima Época; Registro: 2004501; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3; Materia(s): Común; Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.); Página: 1854.

Amparo en revisión 256/2013. Luis Miguel Padilla Martínez. 7 de agosto de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 470/2013, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 2 de diciembre de 2013."

INTERÉS LEGÍTIMO. EN QUÉ CONSISTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.

El interés legítimo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, consiste en el poder de exigencia con que cuenta un sujeto, que si bien no se traduce en un derecho subjetivo, permite reconocerle la facultad de impugnar la actuación o la omisión de una autoridad en orden a la afectación que ello le genera, al no acatar lo previsto por determinadas disposiciones jurídicas que le reportan una situación favorable o ventajosa. Dicho en otras palabras, es la pretensión o poder de exigencia que deriva de una lesión o principio de afectación a la esfera jurídica de un gobernado, generada por un acto de autoridad y sus consecuencias, cuya anulación o declaratoria de ilegalidad trae consigo una ventaja para éste, por hallarse en una situación especial o cualificada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 130/2012. Promo Medios de Comunicación, S.A de C.V. 9 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

(Énfasis propio)

(Sic)

En razón a los argumentos y fundamentos jurídicos y constitucionales vertidos y citados, se estima viable el sobreseimiento del presente sumario constitucional, dado que el actuar de la autoridad que represento no conculca los derechos del quejoso con su actuar, mismo que se encuentra apegado a las normas que le brindan competencia material y que más allá de ello, le imponen la obligación de proteger la salud de la población mediante el ejercicio de las funciones que realiza, mismas que en ningún momento





atentan ni lesionan los derechos tanto individuales como colectivos de las personas que se encuentran en el territorio nacional.

Los razonamientos expuestos, llevan a estimar que para señalar como inconstitucionales los actos que reclama el impetrante de garantías, este último estaba constreñido a acreditar que dichos actos reclamados le afectan en su esfera jurídica, situación que no aconteció, en tales consideraciones queda a todas luces claro que no demostró el interés jurídico necesario para ocurrir al amparo de la Justicia Federal, pues se reitera, del análisis que realice su Señoría a su escrito de amparo y a sus pretensiones no acreditó de forma fehaciente ubicarse en alguna de las hipótesis que señalan los actos que tilda de inconstitucionales, esto es así ya que las disposiciones de las cuales se duele el quejoso, en vez de afectar la salud de la población trasgrediendo sus derechos y garantías individuales tal y como lo menciona, dichos dispositivos fueron creados en pro a la salud pues concientizan de manera directa al consumidor de los productos.

Dichos ordenamientos como lo es los Lineamientos en materia de Control Sanitario de la Cannabis y derivados de la misma, derivaron de la actuación del estado por velar y proteger el derecho a la Salud del cual somos titulares todos los mexicanos, lo anterior con la intención de regular en materia de control sanitario de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, con fines médicos y científicos, y criterios sanitarios para la comercialización, exportación e importación de productos con amplios usos industriales, que contengan derivados de la Cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC. Ante esta urgencia de proteger a todos los mexicanos, se desarrollaron dichas disposiciones legales las cuales tienen el objetivo regular en materia de control sanitario de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, con fines médicos y científicos, y criterios sanitarios para la comercialización, exportación e importación de productos con amplios usos industriales, que contengan derivados de la Cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC. Por lo anterior se actualizaron las regulaciones en materia de cannabis y derivados de la misma, así como de etiquetado de conformidad con los mejores estándares internacionales vigentes a la fecha de su emisión. Es necesario informar a su señoría que si bien dichos dispositivos fueron creados para un beneficio a la sociedad, estos van encaminados a los productores de alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasadas, para que estos cumplan con los criterios y características que deban tomarse en cuenta para efectos de la información nutrimental que exhibirán al consumidor final, para que este último tome la decisión de que productos consumir o no, por lo que queda claro que dichos ordenamientos o disposiciones legales en nada afectan las esfera jurídica del quejoso.

De ahí que, es incuestionable que la impetrante carece de un derecho legítimamente tutelado que la faculte para acudir al juicio de amparo a impugnar los dispositivos legales que señala como inconstitucionales, por lo que lo procedente es sobreseer el presente sumario constitucional, en términos del artículo 64 fracción V de la Ley de Amparo.

TERCERO.- Es improcedente el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Unidos Mexicanos, 73 y 77 de la citada legislación ordinaria, en atención a las consideraciones siguientes.

El quejoso pretende que se le otorgue el amparo y protección de la justicia de la Unión para el efecto de que en la Ley General de Salud, que se reclama, sea permisible la autorización para llevar a cabo la siembra, cosecha y comercialización de Cannabis Sativa L (Cáñamo) con FINES DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL para la obtención de canabidiol ó CBD.

Por lo que se considera que el efecto en sí, sería desvirtuar la voluntad del legislador cuando creó la Ley General de Salud¹, cuyo objetivo fue reglamentar el derecho a la protección de la salud. Al respecto, entre las propias finalidades previstas en la propia ley se señaló "la promoción del bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades" (fracción I del artículo 2o.) De esta manera, con el objeto de alcanzar dicho nivel de bienestar, el legislador consideró necesario implementar un adecuado "control sanitario" de los psicotrópicos y narcóticos, bajo la premisa de que su uso constituye un problema para la salud pública en tanto genera dependencia para el consumidor², razón por la cual ésta autoridad sanitaria considera un riesgo de proporciones incalculables, desafiar el texto jurídico creando un acto ilegal, como lo es la emisión de una autorización sanitaria no contemplada en la Ley.

Ahora bien, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Ello impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley que es una regla de carácter general, abstracta y permanente, la que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que es inconcuso resultaría apartado del principio de relatividad enunciado.

En ese entendido es claro que esta autoridad únicamente ejecuta los mandatos previstos en la Ley General de Salud, misma que fue discutida en su promulgación y posteriores adiciones y derogaciones por el Congreso de la Unión, atendiendo a los preceptos constitucionales, para lo cual resulta aplicable por analogía la siguiente tesis

¹ Esta ley sustituyó al antiguo Código Sanitario y se promulgó el 7 de febrero de 1984. Desde esa fecha no se han reformado los artículos 235 y 237, los cuales fueron impugnados por los quejosos.

² Así, se advierte de la exposición de motivos de dicha ley, y sus correspondientes dictámenes legislativos. Al respecto, Exposición de Motivos, Cámara de Origen: Cámara de Diputados, México, Distrito Federal a 15 de Noviembre de 1983 de la Iniciativa de Ley General de Salud.





jurisprudencial que efectúa una distinción de lo que en términos legales es considerada una Autoridad Ordenadora y una Autoridad Ejecutora:

"AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO.

La fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo, contempla como parte en el juicio de garantías a la autoridad responsable, sin precisar sobre la naturaleza de ordenadora o ejecutora que ésta puede tener en virtud de su vinculación con el acto reclamado, por ello es menester atender a la etimología de la palabra autoridad "auctoritas" que en su origen excluía totalmente la idea de poder y de fuerza, propias de los vocablos latinos "potestas" e "imperium". Así, para los fines de la materia de amparo, es evidente que la palabra autoridad tiene el matiz de poder o fuerza consubstancial tanto a entidades como a funcionarios para hacer cumplir sus determinaciones. La autoridad en nuestros días se entiende como el órgano del Estado investido de facultades de decisión o de ejecución que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, como violatorio de garantías o del sistema de distribución de competencias entre la Federación y los Estados, que está obligada a rendir el informe justificado correspondiente y a quien corresponde defender la constitucionalidad de dicha ley o acto. Hasta mil novecientos noventa y siete, en el sistema jurídico mexicano se sostuvo que el concepto de autoridad para efectos del amparo comprendía a todas aquellas personas que disponían de la fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, estaban en posibilidad material de obrar como individuos que ejercieran actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponían; este criterio fue interrumpido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ahora establecer que en cada caso se debe analizar si se satisfacen o no los presupuestos para determinar cuándo una autoridad puede ser considerada o no, como autoridad responsable para efectos del amparo, porque con independencia de que pueda ejercer la fuerza pública de manera directa o por conducto de otras autoridades, como órgano de Estado perteneciente a la administración pública centralizada o paraestatal, ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, de manera unilateral, a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados. Así, las características distintivas que debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del amparo, son: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como puede observarse, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos órdenes (federal, estatal o municipal); se trata de cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales, autónomos, cualquiera que sea su denominación. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los





efectos del amparo ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar las características particulares de aquel a quien se le imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste. No todo acto, aun emitido por una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. Luego, dado que la ley de la materia no establece algún concepto de autoridad responsable ordenadora, se recurre a las raíces etimológicas de la palabra ordenadora, la que proviene del latín "ordinator-ordinatoris", es el que pone orden, el que ordena, el que arregla; es un derivado del verbo "ordinare", ordenar, poner en regla, regular; el sufijo "-dor", indica al sujeto o agente que realiza la acción del verbo; así, para los efectos del amparo la autoridad ordenadora será el órgano del Estado investido de facultades de decisión que expide la ley o dicta una orden o mandato que se estima violatorio de garantías o del sistema de distribución de competencias entre la Federación y los Estados y sobre el cual está obligado a rendir un informe previo o justificado, dentro del plazo legal, en el que expresará si son o no ciertos los actos que se le imputan. Esto es, se trata de aquella autoridad del Estado que por razón de su jerarquía tiene la facultad para emitir un mandato o una orden que debe cumplirse por la autoridad subalterna y en contra de un gobernado. Por otra parte, la ley de la materia tampoco proporciona el concepto de autoridad ejecutora para los efectos del amparo, por lo que se recurre al origen de la palabra ejecutora, que proviene del latín "exsecutio-exsecutionis", acabamiento, ejecución, cumplimiento [en especial de una sentencia], ya constatado en español hacia el año mil cuatrocientos treinta y ocho; este vocablo se compone de la preposición latina "ex", que indica origen, procedencia; también puede usarse como un refuerzo que añade idea de intensidad; y el verbo "sequor", seguir; el verbo "exsequor" significa seguir hasta el final, seguir sin descanso, acabar, terminar totalmente una tarea. Así, la autoridad ejecutora es aquella que cuenta con autoridad propia para cumplir algo, ir hasta el final; luego, para los efectos del amparo, será la que ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, es decir, aquella que lleva a cabo el mandato legal o la orden de la autoridad responsable ordenadora o decisoria, hasta sus últimas consecuencias porque es la que tiene el carácter de subalterna que ejecuta o trata de ejecutar o ya ejecutó el acto reclamado dictado por la autoridad ordenadora, ya que conforme a las facultades y obligaciones que la ley le confiere le corresponde el cumplimiento de la sentencia, esto es, la actuación inmediata tendente a acatar el fallo definitivo acorde a las consideraciones y resoluciones que contenga. Por ello, cuando la autoridad señalada en la demanda de amparo directo no es el órgano jurisdiccional que emitió la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin a juicio, sólo puede considerársele autoridad responsable si tiene el carácter de ejecutora formal y material del acto que se reclame de acuerdo con la ley o con los términos del acto ordenador. Si una autoridad es señalada como responsable y no tiene conforme a la ley funciones de ejecutora formal y material y los actos que se le atribuyen no están ordenados en el mandato del órgano jurisdiccional que dictó la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin a juicio, debe considerarse que no obró en cumplimiento de éste, sino que lo hizo de propia autoridad; de ahí que no tenga el carácter de autoridad





responsable ejecutora, para los efectos del juicio de amparo directo.”
(Subrayado añadido)

Del análisis de dicha jurisprudencia se colige que **esta Comisión Federal sólo se encuentra investida por una facultad de ejecución**, es decir, se limita a acatar lo relativo a control, vigilancia y fomento sanitarios, en el caso concreto por cuanto se refiere a estupefacientes y sustancias psicotrópicas, pero está impedida legalmente de pronunciarse respecto a la creación del marco que las regula, **toda vez que la Autoridad Ordenadora es el Congreso de la Unión**, ya que con fundamento en el artículo 71 constitucional, es éste último órgano estatal el facultado para crear y promulgar leyes.

En el caso en particular, de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, traería como efecto que se ordenara a la responsable reparar la omisión del Acuerdo impugnado por este medio, mediante la inclusión de una disposición menos rígida. Con lo anterior, se le daría efectos generales a la ejecutoria, ya que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con el “Acuerdo” reformado, lo que pugnaría con el principio de relatividad enunciado.

Resultan aplicables a lo anterior los siguientes criterios: Novena Época, Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Diciembre de 1997, Página: 180, Tesis: P. CLXVIII/97, Tesis Aislada, Materia(s): Común, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL. Respecto de la omisión del legislador ordinario de dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir determinada ley o de reformar la existente en armonía con las disposiciones fundamentales, es improcedente el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la citada legislación ordinaria, en virtud de que, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley que es una regla de carácter general, abstracta y permanente, la que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que es inconcuso resultaría apartado del principio de relatividad enunciado.





CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO

Se contesta los conceptos de impugnación marcados por el impetrante del sumario constitucional donde se duele de los actos reclamados en virtud de que los mismos carecen de la debida fundamentación y motivación reforzada que deberá justificar los criterios de evaluación y dictamen de solicitudes de autorización en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados, trasgrediendo con ello los derechos contenidos en el artículo 16 Constitucional en relación con los artículos 1, 5 y 14 constitucionales respecto al derecho a la salud, como por las Convenciones Americanas de Derechos Humanos.

De lo anterior se tiene que los conceptos de violación hechos valer por el impetrante de garantías son **inoperantes e infundados** en virtud de lo siguiente:

Los ordenamientos legales tildados de inconstitucionales consistentes en el ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos en materia de Control Sanitario de la Cannabis y derivados de la misma, se encuentran debidamente fundados y motivados, ya que los mismos fueron creados siempre salvaguardando la garantía a la protección de la salud con la cuentan las personas para un disfrute al más alto nivel posible, así como el derecho a la información, que en el caso concreto ha de vincularse con la salud, derechos que no se encuentran menoscabados por la emisión de los multicitados ordenamientos, ya que fueron emitidos con la finalidad de proteger la salud de la población e informar respecto los criterios de evaluación y dictamen de solicitudes de autorización en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados, de los productos.

En tales consideraciones es a todas luces claro que, dichas disposiciones NO trasgrede el derecho a la alimentación y a la información de los consumidores como lo menciona la quejosa ya que el sistema normativo impugnado da los criterios de evaluación y dictamen de solicitudes de autorización en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados, que contiene cada producto para que el consumidor mexicano este en posibilidades de elegir el que mejor se ajuste a sus necesidades nutricionales, para que así se cumpla el objetivo del cual primigeniamente fue creado, que es el de proteger la salud de la población mexicana modificando la manera de mostrar al consumidor la información nutricional en alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, para incrementar la calidad de vida en las personas.

Aunado a que se pondría en duda la actuación de mi representada como Autoridad Sanitaria, a pesar que de la misma es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una Autoridad Sanitaria de Referencia Regional, y se pondría en tela de juicio que México tiene una autoridad nacional para la protección contra Riesgos Sanitarios Confiable y Eficaz, destacada por su capacidad técnica operativa y regulatoria, puesto que se llegaría al punto de que se sustituyeran sus facultades de Regulación Sanitaria, situación que no puede acontecer, puesto que el quejoso no puede pretender que su Señoría sea un experto en materia nutricional y de alimentos y se sustituya en las facultades con las que cuenta la Autoridad Sanitaria simplemente porque a criterio mismo, las disposiciones no cumplen sus expectativas personales o a criterio del mismo.



no generan un avance en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados, así como, cuando sus argumentos son contrarios a la realidad como aquí se ha demostrado.

Bajo este mismo contexto, como podrá observar su Señoría la quejosa refiere una afectación a los derechos Constitucionales, cuando la realidad es que esta Autoridad Sanitaria más allá de generar una afectación a los consumidores mexicanos lo que está haciendo, es proteger el derecho a la salud consagrado a nivel de garantía constitucional puesto que está implementando una regulación sanitaria más estricta para los productos que hoy en día en México son consumidos, sin tener idea del daño que puede generar su consumo, es por ello que implementó dichas disposiciones en materia de nutrición basándose en estándares internacionales, los cuales deberán de ser estrictamente acatados por los fabricantes y comercializadores de alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasadas, para poder comercializar sus productos, para que así informen de manera verídica la totalidad de los contenidos del producto, y así el consumidor mexicano pueda decidir sobre qué productos consumir o no.

Así mismo, de lo manifestado por el impetrante de garantías es contrario a la realidad, ya que el sistema normativo que se reclama en el presente sumario constitucional, tal y como se ha venido mencionando a lo largo del presente informe con justificación, tiene como finalidad dar información verídica, sencilla de los criterios de evaluación y dictamen de solicitudes de autorización en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados, de los productos y bebidas no alcohólicas pre envasadas que se ponen a disposición del consumidor mexicano para su consumo, hechos que en momento algún significan una regresividad de las normas que garantizan el derecho a la salud de los consumidores mexicanos.

El derecho que le asiste a la población para obtener tratamientos a base del estupefaciente tetrahidrocanabinol, debe ser con bases y elementos que permitan garantizar a un sector de la población que se encuentre en un estado de salud que requiera como medicamento el Tetrahidrocannabinol (THC) es decir, el único facultado para prescribir medicamentos es un profesional de la salud, no cualquier persona, por lo que se resalta que el quejoso solo establece la siembra, cosecha y comercialización de Cannabis Sativa L (Cáñamo) con FINES DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL para la obtención de canabidiol ó CBD, sin embargo, de acuerdo a la literatura, la planta contiene alrededor de 500 componentes, la pregunta es, como determinan que el único componente que obtendrían sería el tetrahidrocannabinol, y no otros que se encuentren mezclados.

Esto es, tendrían que comprobar que el único componente obtenido es (THC) y ninguno de los demás compuestos se encuentra en su extracto preparado por el quejoso, así como en qué porcentaje se obtuvo de la sustancia.

El médico tratante debe determinar la vía de administración, la dosis, la periodicidad, estos no son límites o bien actos discriminatorios, si lo que decreta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el derecho humano a la Salud, garantizando a los mexicanos el acceso a los lineamientos emitidos para proveer otras opciones terapéuticas, ya que es



obligación del Estado que sea a través de una forma en la que se garantice la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos a los que vaya tener la población a su alcance.

Como podrá advertirse de lo antes vertido, no existe discriminación que vulnere ninguno de los tratados internacionales, ya que el Estado Mexicano bajo el principio de progresividad, ha implementado los Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y derivados de la misma, a fin de poner a disposición de la población el acceso a opciones en las que se obtenga el estupefaciente tetrahidrocannabinol y el porcentaje adecuado a cada problema de salud en la que el profesional de la salud determine como única opción el uso de dicho estupefaciente el porcentaje adecuado a cada paciente.

Una de las finalidades de los Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y derivados de la misma, es principalmente que tanto las personas físicas, organismos públicos, sociales y privados, tengan el acceso a tener como opción o alternativa la prescripción del estupefaciente, así como la investigación, de donde se desprende que no hay discriminación ni limitación o impedimento para el acceso a estos productos.

Dichas disposiciones transparentan el contenido real de los productos, para que el consumidor tenga certeza respecto de lo que está comiendo o tomando, siendo esto el principal avance de los criterios de evaluación y dictamen de solicitudes de autorización en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados, el cual otorga al consumidor mexicano un elemento visual que le auxilia en una mejor toma de decisiones, aunado a que los criterios nutrimentales que se observan para su autorización son concordantes con las mejores prácticas internacionales.

En tales consideraciones es de suma importancia mencionar que todo fabricante y comercializador de productos en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados, así como alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasadas deberá solicitar a la COFEPRIS la autorización y acreditar la calidad de los productos, la cual, **tendrá la facultad discrecional de aprobar o rechazar cada solicitud**, teniendo de igual manera la facultad de retirar del mercado y sancionar cualquier producto que ostente el "distintivo nutrimental" sin cumplir con el artículo 25Bis del Reglamento de Productos y Servicios mismo que al tenor refiere:

"ARTÍCULO 25 Bis. El etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas podrá incluir el distintivo nutrimental, cuando a petición de parte interesada, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios determine que el producto de que se trate, cumple con los criterios nutrimentales que se emitan en términos del presente artículo.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Secretaría, mediante Acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación, establecerá el distintivo nutrimental, así como los criterios nutrimentales que deben tomarse en cuenta para determinar la procedencia de su uso y el procedimiento que deberá seguirse para su autorización, en el que deberá considerarse un plazo de respuesta no mayor a tres meses."
(Sic)





Por cuestiones como las que se están analizando y las tocadas en el concepto de violación estudiado, su Señoría podrá observar que las medidas emitidas por la autoridad sanitaria, puestas en tela de juicio por la quejosa, no representan una agresión a los derechos de los consumidores y menos aún trasgrede el principio de no regresividad contenido en nuestro máximo Ordenamiento Constitucional puesto se reitera más allá de generar una afectación a los consumidores mexicanos lo que está haciendo, es proteger el derecho a la salud consagrado a nivel de garantía constitucional puesto que, está implementando una regulación sanitaria más estricta para los productos que hoy en día en México son consumidos, sin tener idea del daño que puede generar su consumo, es por ello que implementó estos lineamientos basándose en estándares internacionales, los cuales deberán de ser estrictamente acatados por los fabricantes y comercializadores de productos en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados, alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasadas, para poder comercializar sus productos, para que así informen de manera verídica la totalidad de los contenidos del producto, y así el consumidor mexicano pueda decidir sobre qué productos consumir, aunado a que si no se acatan dichas disposiciones la Autoridad Sanitaria podrá retirar del mercado los productos que no cumplan, es por ello que se solicita de manera respetuosa se considere lo plasmado en el presente informe con justificación, para negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitada por el quejoso, ya que lo único que conllevaría sería un perjuicio para la población mexicana y no así un beneficio como lo trata de disfrazar el impetrante de garantías, puesto que como se ha explicado en el presente, las disposiciones señaladas como acto reclamado, cuentan con la noble finalidad de proteger la Salud de los consumidores mexicanos, haciendo más estricto la información nutrimental de cada producto.

A).- Con la finalidad de demostrar la legalidad de los actos realizados por mi representada y resaltar la inoperancia de los argumentos hechos valer por el quejoso, es de suma importancia señalarle a su Señoría que de conformidad con los artículos 1, 2 y 3, fracción XXI, de la Ley General de Salud, se deduce que el objeto de la Ley General de Salud es, entre otros, la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos, en este sentido, la constitucionalidad de los artículos impugnados no puede hacerse depender de la situación personal del quejoso, al tratarse de una norma de carácter general, impersonal y abstracta, cuya finalidad es la protección de la salud, entendida como el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; y la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social.

De esta forma, la prohibición contenida en los artículos impugnados no son arbitrarias, ni caprichosas; no constituyen una intromisión al derecho a la intimidad, pues no se obliga al quejoso a revelar aspectos de su vida no conocidos por otros y que, por tanto, cada sujeto puede decidir revelar, esto es, el reconocimiento del ámbito propio y reservado del individuo ante los demás no se ve violentado con los artículos reclamados, en virtud de que éstos no interfieren en el poder de decisión del quejoso sobre datos relativos a su persona, quedando intocada la disponibilidad sobre su vida y decisión de lo que revelar de su intimidad a los demás.





Tampoco se vulnera en perjuicio de ninguna persona el desarrollo de la personalidad, pues las normas impugnadas no limitan en forma alguna la libertad de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma.

De igual forma, no existe violación a la intimidad de ninguna persona, pues los numerales que consideran inconstitucionales no pretende coartar su libertad de decidir qué aspectos de su vida deciden revelar, pues la disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los demás no se ve afectada, sin que ello signifique ocultar información, sino que puedan desarrollar su vida con libertad y con la posibilidad de resolver, a voluntad propia, qué aspectos de su vida admiten exponer al conocimiento de otros, para salvaguardar su dignidad humana.

Ciertamente, en el caso, no se observa que los principios de identidad personal, intimidad, imagen y desarrollo de la personalidad que se encuentran ligados al derecho fundamental de la dignidad humana se encuentren limitados o vulnerados, pues la finalidad de los preceptos legales que nos ocupan, como quedó establecido en la exposición de motivos de la Ley General de Salud, es de dar cumplimiento a la obligación del Estado de proteger la salud de toda persona en términos del artículo 4º Constitucional, bajo el respeto de la dignidad humana de las personas, evitando trasgresiones al orden público, preservando derechos de terceros y del orden público, pues el individuo tiene y conserva el derecho de decidir, en forma libre, sobre su propia imagen.

De concluir que las normas impugnadas atentan contra la dignidad humana y cualquiera de los derechos fundamentales de los gobernados, entonces, no sería razonable la prohibición contenida en los mismos, trátase de la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, pues debe tenerse en cuenta que la protección de la salud, en definitiva, es una previsión constitucional sobradamente importante para operar como objetivo justificador de la limitación a la libertad de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga.

Así la dignidad humana, está situada en casi cualquiera de sus ámbitos de ejercicio en el centro de un entramado regulatorio muy intenso, destinado a garantizar ése y otros muchos contenidos constitucionalmente relevantes, cuya protección se vería puesta en peligro por un ejercicio de la misma no debidamente limitado desde la perspectiva de objetivos e intereses públicos como los que las previsiones legislativas impugnadas sitúan en el centro de sus propósitos.

Entonces, contrario a lo señalado por el quejoso, no existe violación al derecho fundamental de la dignidad humana en perjuicio de persona alguna, reclamado éste con los principios de personalidad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, pues

quedó señalado, en la exposición de motivos de la Ley General de Salud, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

Asimismo, la Constitución Política Federal al establecer en el párrafo tercero del artículo primero que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas”, atiende a la dignidad de la persona humana que fundamenta la diferencia en el trato de las personas y las cosas, subrayando que la jerarquía de la persona humana es algo que se establece en relación con los demás seres corpóreos, pero no en relación de unas personas con otras; esto es, cuando se habla de la dignidad en relación de unas personas con otras no existe ese significado de superioridad, sino un significado de igualdad, pues la dignidad la poseen todas las personas por el mero hecho de tener naturaleza humana.

Así, las disposiciones impugnadas de ninguna manera ponen en peligro el derecho fundamental de la dignidad de las personas, pues el hecho de prohibir la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, como se puso de manifiesto en párrafos anteriores, no genera riesgo alguno en la subsistencia digna de los destinatarios de la norma, ya que no tiene como finalidad imponer modelos y estándares de vida que sean ajenos a los particulares, pues no se vulneran los principios de personalidad, propia imagen, intimidad, desarrollo de la personalidad y autodeterminación, esto es, no se interviene en aquellos asuntos de trascendencia personal y privada, para imponer coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto, máxime que las normas reclamadas no imposibilitan a los destinatarios ejercer todos sus demás derechos fundamentales necesarios para desarrollar integralmente su personalidad.

Sino por el contrario, es obligación incuestionable del Estado proporcionar a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a través de la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, como en el caso, de las adicciones y la lucha contra ellas, con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, derecho que no podrá ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley y sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público y la salud.

Así las cosas, la tesis de neutralidad axiológica del Estado se refiere a la imposición de determinadas ideologías morales y no así a las obligaciones estatales en materia de garantizar los derechos humanos, ya que de lo contrario los Derechos Económicos, Sociales y Culturales no tendrían razón de ser en virtud de que los objetivos que persiguen son mejorar a través de acciones positivas, principal pero no exclusivamente, las condiciones de vida de la población, pero en esta lógica del intervencionismo estatal no habría cabida a los mismos, lo cual es un sinsentido, tal y como ocurre con la



intervención estatal en favor de proteger la salud de la población, ya que si el Estado ha decidido interferir, lo es para promover, respetar, proteger y garantizar el bienestar físico, mental y social de los individuos a través de una serie de bases y modalidades.

Por lo que cabe recordar, que el Estado tiene la obligación positiva de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud, así el fin inmediato del Estado es proveer de salud en las mejores condiciones posibles, y los impetrantes de garantías pretenden defender el derecho a la salud en su aspecto negativo, especialmente que el consumo de marihuana no es un derecho fundamental; de ahí que la restricción contenida en los artículos impugnados debe considerarse como constitucionalmente válida, ya que en términos del artículo 3° de la Ley General de Salud, **es obligación del Estado la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos.**

De modo que el propósito último de tales disposiciones reside no sólo en contribuir al bienestar físico y mental del hombre sino evitar que se genere la proliferación de sustancias nocivas, lo que es justificable con el fin que se pretende, ya que la autorización para su producción, puede generar afectación a la sociedad en general, es decir, la disminución en los valores que coadyuvan a la creación, conservación y disfrute de las condiciones de salud.

La salud es una necesidad primordial en la vida de las personas, como sustento para el pleno desarrollo de las capacidades humanas, tanto físicas como intelectuales; por tanto, la salud es imprescindible en la realización personal que se logra mediante la convivencia armónica, el trabajo, la educación, la cultura y el entretenimiento, en otras palabras, es el primer requisito para el bienestar.

Ahora, dado que la salud es un derecho fundamental del ser humano, el uso y abuso de psicotrópicos y estupefacientes representa una preocupación creciente para el Gobierno Federal, entidades federativas y la sociedad en general, de ahí que contrario a lo señalado por el quejoso, es necesario mantener un estricto control en su manejo a efecto de evitar un uso inadecuado de los mismos que puede conllevar a generar problemas tan graves como la drogadicción.

Además, en sentido contrario a lo que aducen el quejoso, los preceptos que impugna, si bien es cierto establecen una limitante, ésta se sujeta al principio de menor restricción, ya que no todos los habitantes del país requieren consumir cannabis o marihuana y sí, por el contrario, necesitan que se garantice su salud, de modo que la afectación que la peticionaria de amparo pudieran resentir, encuentra justificación constitucional.

En relación a que existen alternativas menos gravosas que permitirían alcanzar los fines del Estado, y que son menos restrictivas de los derechos a la autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia y que darían mejores resultados en la consecución del fin perseguido por el Estado; cabe aclarar, contrario a lo aducido, que no hay motivos para reprochar la del legislador construida sobre la base de la limitación reclamada, que permite establecer que la medida no es proporcional para alcanzar los resultados deseados.



virtud de que el nivel de protección contra las adicciones es claramente más alto que lo pretendido por los accionantes de amparo.

Asimismo, cabe señalar que el quejoso establece una premisa errónea, pues consideran como un derecho la siembra, cultivo, y consumo de marihuana, sin embargo, la prohibición contenida en los artículos impugnados es constitucionalmente válida, toda vez que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte lo han constituido como un derecho; por tanto, los artículos impugnados no son inconstitucionales, en virtud de que no se puede hablar de una restricción de un derecho cuando éste no existe como tal, de ahí que contrario a lo señalado por el quejoso, los artículos impugnados no deban cumplir con los requisitos necesarios para restringir un derecho.

En este sentido, la acción del Estado debe estar encaminada a ayudarle a la población a proteger su salud y no a facilitarle que con el uso de una sustancia tóxica que es dañina para su organismo y para su mente, perpetúe el daño a su salud, pues contravendría tanto nuestra Carta Magna, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros ordenamientos legales, e incluso los criterios jurisprudenciales pronunciados por el Máximo Tribunal Constitucional en éste sentido, cuyos rubros son "DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD" y "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL", que en resumen establecen que el derecho a la protección de la salud es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados.

Aunado a lo anterior es de resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

Este criterio se desprende del texto de la tesis número 1a. LXV/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 169316 del IUs y en la página 457, del Tomo XXVIII, julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la





Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.

Esto quiere decir, que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad, cuyo contenido e interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encuentra compatibilidad con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

Así, se observa de los siguientes ordenamientos, el párrafo 1º del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido también como "Protocolo de San Salvador", 6, 24, 25 y 26, de la Convención sobre los derechos del niño, que han establecido entre otros de los puntos a destacar, lo siguiente:

➤ *Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;*





- Que los Estados Parte en dichos Pactos, Tratados y Convenciones, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental y social.
 - La reducción de la mortalidad y de la morbilidad infantil, y el sano desarrollo de los niños.
- La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.*
- El reconocimiento por parte de los Estados, del derecho de los niños al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades, la rehabilitación de la salud."

Es necesario traer a colación que en el Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I, del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, entre otros, el artículo 1º de la Constitución Política, incorporando al texto constitucional la protección de los derechos humanos reconocidos tanto en dicha Ley Suprema como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Para optimizar la aplicación de dicha enmienda, el Constituyente puntualizó en los párrafos segundo y tercero del artículo 1 de la Constitución Política, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Luego entonces, todas las autoridades del país deben atender a cabalidad y proteger los derechos humanos de los habitantes de México, como una obligación inherente, en términos del artículo 1º Constitucional y en términos de la tesis número P. LXI/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 163169 del IUS y en la página 24, del Tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

DERECHO A LA VIDA. SUPUESTOS EN QUE SE ACTUALIZA SU TRANSGRESIÓN POR PARTE DEL ESTADO. *El derecho a la vida impone al Estado una obligación compleja, en tanto que no sólo prohíbe la privación de la vida (que se traduce en una obligación negativa: que no se prive de la vida), sino que también exige que, a la luz de la obligación de garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos, adopte medidas positivas para preservar ese derecho en el ámbito legislativo, judicial y administrativo. En ese sentido, existe transgresión al derecho a la vida por parte del Estado no sólo cuando una persona es privada de la vida por un agente del Estado, sino también cuando éste no adopta las medidas razonables y necesarias aludidas,*



como son las tendientes a preservarla, a minimizar el riesgo de que se pierda en manos del Estado o de otros particulares, y las necesarias para investigar efectivamente los actos de privación de la vida.

En este orden, la protección del derecho a la salud, exige entre otras de las obligaciones de los Estados, que para garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos, **adopte medidas positivas para preservar ese derecho en el ámbito legislativo, judicial y administrativo.**

Lo mismo se desprende de la Observación General No. 14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la cual no es una mera declaratoria, sino que constituye una obligación de hacer para el Estado Mexicano al ser uno de los 51 miembros fundadores de la Organización de la Naciones Unidas, que firmaron la Carta de la Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, dicha disposición establece lo siguiente:

Observación General No. 14

(...)

*33. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligación a los Estados Partes: la obligación de respetar, proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directamente o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías previstas en el artículo 12. Por último, **la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud.***

En este orden, en cumplimiento al artículo 4º Constitucional y los diferentes ordenamientos internacionales que México ha suscrito, entre ellos los citados por la demandante, el poder legislativo emitió los artículos 235 en su último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 en su último párrafo y 248, de la Ley General de Salud, en donde se respeta el derecho a la salud, ya que se protege a la sociedad, previniendo e inhibiendo la venta de marihuana que ocasiona daños fatales e incluso irreversibles a largo plazo.

En este sentido, se podrá observar que el quejoso en su ampliación de demanda de amparo, realizan manifestaciones encaminadas a justificar su solicitud con el aumento del consumo de marihuana, tratando de resaltar que la denominada "política prohibicionista" por el quejoso no previene riesgos a la salud ni combate las adicciones, cuando la realidad es otra, ya que uno de los componentes de la política pública en materia de drogas es la portación de drogas para consumo personal, misma que está regulada en el artículo 478 de la Ley General de Salud, más no prohibida, lo cual permite inferir que la aludida prohibición absoluta no es tal y su fin está encaminado a proteger el derecho a la salud tomando en cuenta que el artículo citado dispone lo siguiente.

*Artículo 478.- El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en **contra de quien sea farmacodependiente o consumidor** y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, **para su estricto consumo personal** y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de*





esta Ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.

El Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria de la entidad federativa donde se adopte la resolución con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. La información recibida por la autoridad sanitaria no deberá hacerse pública pero podrá usarse, sin señalar identidades, para fines estadísticos.

De acuerdo a la porción del artículo anteriormente transcrito se desprende que la Ley General de Salud prevé que las personas farmacodependiente o consumidor y posea narcóticos de los regulados (artículo 149 Ley General de Salud), no será procesado penalmente, la autoridad ministerial a su vez informará a los consumidores la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia; además la autoridad ministerial emitirá reporte a la autoridad sanitaria para que con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención, siendo el caso que el reporte aludido solo tendrá fines estadísticos, desde luego al hacer referencia a consumo personal, ello implica que no se está incurriendo por parte del consumidor en conductas de tráfico o comercialización de estupefaciente que si son sancionadas por la Leyes penales, además a las personas que se les detecte se les informa de lugares en los que pueden recibir atención a su adicción, más no se les está obligando, coaccionando, sometiendo a recibir forzosamente a un tratamiento.

Bajo este mismo contexto la autoridad sanitaria que reciba reporte de la autoridad ministerial relativo a consumidores posean narcóticos de los regulados, al respecto se encargará de promover la correspondiente orientación médica o de prevención, más en momento alguno a obligar al consumidor a recibir un tratamiento, pues tal decisión solo queda en el libre albedrío de la persona consumidora, garantizando con ello su esfera de derechos humanos prevista en nuestro marco constitucional, dichas consideraciones pueden ser revisadas en el texto "CONSUMO DE DROGAS: riesgos y consecuencias", emitidos por los Centros de Integración Juvenil, A.C. páginas 133 a 159, primera edición. México 1914, texto que incluso menciona que una eventual legalización, sí incrementaría el consumo sobre todo en menores de edad señalando las consecuencias que ello implica para los derechos de la niñez y la infancia.

Independientemente de los estudios que demuestran los efectos dañinos que tiene la marihuana (THC) en el cuerpo humano, los artículos de la Ley General de Salud que se tildan de inconstitucionales tienen como finalidad aspirar a un estado de bienestar físico y mental en congruencia con lo preceptuado en artículo 1 bis de la Ley General de Salud, lo que sin duda no lo es aquel que afecta una condición anímica o provoca un cambio de una percepción de ánimo y estado de conciencia, en relación al mundo real.

Por lo que esta autoridad considera que no le asiste razón al quejoso para pretender que considere como dignidad humana, a un acto de voluntad que elimina cualquier posibilidad de intervención estatal cuando se está en presencia de una afectación de la



salud de las personas, pues como quedo asentado en párrafos que anteceden, la intervención estatal se da en beneficio de la protección del derecho a la salud, a través del control sanitario de estupefacientes que representan un grave daño a la salud pública.

Resulta aplicable al presente asunto la Tesis 2a. CXXVI/2015 (10a.), Época: Décima Época, Registro: 2010360, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II Materia(s): Constitucional, Página: 1298, cuyo rubro y textos son:

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE DICHO PRINCIPIO. El principio de progresividad de los derechos humanos tutelado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque su observancia exige, por un lado, que todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementen gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y, por otro, les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que disminuyan su nivel de protección. Respecto de esta última expresión, debe puntualizarse que la limitación en el ejercicio de un derecho humano no necesariamente es sinónimo de vulneración al referido principio, pues para determinar si una medida lo respeta, es necesario analizar si: (I) dicha disminución tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano; y (II) genere un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos. En ese sentido, para determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano viola el principio de progresividad de los derechos humanos, el operador jurídico **debe realizar un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho en relación con las implicaciones colectivas de la medida, a efecto de establecer si se encuentra justificada.**

Así, las disposiciones impugnadas de ninguna manera ponen en peligro el derecho fundamental de la dignidad de las personas, pues el hecho de limitar siembra, cosecha y comercialización de Cannabis Sativa L (Cáñamo) con FINES DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL para la obtención de canabidiol ó CBD y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, con las excepciones de aquellos actos encaminados a fines médicos y científicos, previa aprobación de la autoridad sanitaria.

Así las cosas, como se puso de manifiesto en párrafos anteriores, no genera riesgo alguno en la subsistencia digna de los destinatarios de la norma, ya que no tiene como finalidad imponer modelos y estándares de vida que sean ajenos a los particulares, pues no se vulneran los principios de personalidad, propia imagen, intimidad, desarrollo de la personalidad y autodeterminación, esto es, no se interviene en aquellos asuntos de trascendencia personal y privada, para imponer coercitivamente una visión de lo bueno y de lo correcto, máxime que las normas reclamadas no imposibilitan a los destinatarios ejercer todos sus demás derechos fundamentales necesarios para desarrollar integralmente su personalidad.

B).- Ahora bien, una vez que ha quedado demostrado que las disposiciones legales de las cuales se duele el quejoso no trasgreden los derechos fundamentales que señalan, se procede a demostrar que las manifestaciones a las que hacen referencia con relación a los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 476 de la Ley General de Salud señalando que vulneran sus derechos humanos relativos a la propia imagen, libertad individual, intimidad, inherente al libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana, disposición de la salud personal, autodeterminación personal y corporal, implicando una restricción inconstitucional e ilegítima, son a todas luces inoperantes contrarias a la realidad.

En el caso en particular, el quejoso refiere una violación a su libre desarrollo de la personalidad, imagen, intimidad y dignidad humana, sin embargo, dichos derechos no son absolutos, de tal manera que pueden ser limitados con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido. Al respecto, resulta importante identificar los límites a este derecho que han sido reconocidos por este Alto Tribunal. En relación con este tema la Suprema Corte explicó que este derecho "no es absoluto, pues encuentra sus límites en los derechos de los demás y en el orden público" (énfasis añadido). Como puede observarse, se trata de límites externos al derecho que funcionan como cláusulas que autorizan al legislador a intervenir en el libre desarrollo de la personalidad para perseguir esos fines.

Sirve de apoyo la tesis número P. LXVI/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 165822 del IUS y en la página 7, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época, de rubro y texto siguientes:

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.

De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.

Ahora bien, lo anterior no implica de modo alguno que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, establecido y entendido como una premisa mayor dentro del orden jurídico nacional, elimine cualquier posibilidad de intervención estatal, sobre todo cuando estamos frente a una sustancia -marihuana-THC que produce una afectación en la salud de las personas; puesto que de lo contrario, centrarse en la "no intromisión estatal" a las libertades individuales, imposibilitaría para el Estado asumir y desarrollar un e

de salud pública, indispensable para proteger debidamente los derechos humanos de la población en general, y el derecho a la salud en particular.

En ese sentido, ningún derecho fundamental es absoluto y por lo tanto todos admiten restricciones; sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria, por lo que para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos:

- **Admisibilidad.-** La restricción creada por el legislador debe ser admisible conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e idónea para regir en el caso concreto donde se actualiza la medida; es decir, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos fundamentales en los casos y en las condiciones que el propio ordenamiento Supremo establece, como lo prescribe su artículo 1o. Por tanto, es claro que el legislador no tiene facultades para fijar limitaciones a derechos fundamentales, adicionales a las que derivan de la norma fundamental, y sus atribuciones de producción normativa sólo deben desplegarse para dar contenido exacto a aquéllas, que deben ser idóneas y adecuadas para el caso concreto o la necesidad social que determina una regulación.
- **Necesidad.-** La medida legislativa de carácter restrictivo debe ser necesaria para asegurar la obtención de los fines que la fundamentan, porque no basta que la restricción sea en términos amplios, útil para la obtención de ese fin, sino que, de hecho, esa medida debe ser la idónea, óptima e indispensable para su realización. Por ello, el Juez constitucional debe asegurarse de que el fin buscado por el legislador no pueda alcanzarse razonablemente por otros medios menos restrictivos o intrusivos de derechos fundamentales, dado que las restricciones constitucionalmente previstas a éstos tienen un carácter excepcional, lo cual implica que el legislador debe echar mano de ellas sólo cuando sea estrictamente necesario; y
- **Proporcionalidad.-** La medida legislativa debe ser proporcional, lo que implica respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales. Así, el objetivo es que el resultado del balance entre ventajas y desventajas o entre beneficios y costos, siempre derive en un resultado o cociente positivo, si se quiere superavitario, entendiendo que el beneficio supere al daño, a partir de un equilibrio entre las razones pertinentes y que se atiendan en la medida del óptimo posible para casos concretos.

Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales.

De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluir normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos

legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática.

Sustenta lo anterior la tesis de Jurisprudencia número 1a./J. 2/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 160267 del IUS y en la página 533, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, Décima Época, de rubro y texto siguientes:

RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática.

En ese orden de ideas conviene precisar que las restricciones impuestas en la Ley General de Salud, y que son impugnadas por el quejoso, están debidamente justificadas.

Se dice lo anterior ya que hay que tomar en cuenta que las restricciones se dirigen a proteger el derecho a la salud de la sociedad en general, catalogando dicha protección como una garantía y un fin constitucional la cual está consagrada en el artículo 4º, párrafos cuarto y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo el derecho a la salud de los propios consumidores.



Artículo 4º. (...)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federales materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

(...)

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. **Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.** Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estatuido que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.

Época: Novena Época

Registro: 165826

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXX, Diciembre de 2009

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. LXVIII/2009

Página: 6

DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL.

El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LXVIII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.





De dicha disposición constitucional, se advierte, en primer término, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que especial cuidado merece la salud de los niños y las niñas por ser un sector vulnerable de la población, siendo sus padres o tutores los obligados a preservar tal derecho, estando obligado el Estado a proveer lo necesario para propiciar el ejercicio pleno de tales derechos.

En efecto, la expedición de la Ley General de Salud tuvo como propósito reglamentar el derecho a la protección de la salud. Al respecto, entre las propias finalidades previstas en la propia ley se señaló "la promoción el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades" (fracción I del artículo 2o.). De esta manera, con el objeto de alcanzar dicho nivel de bienestar, el legislador consideró necesario implementar un adecuado "control sanitario" de los psicotrópicos y narcóticos, bajo la premisa de que su uso constituye un problema para la salud pública en tanto genera dependencia para el consumidor.

Por otro lado, hay que destacar que el actual artículo 1º de Ley General de Salud dispone que este ordenamiento tiene como objetivo reglamentar el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4º de la Constitución, así como establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de "salubridad general". De acuerdo con la propia ley, este concepto comprende, entre otras cosas, tanto la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos como la existencia de un programa contra la farmacodependencia (fracción XXI del artículo 3º).

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que la finalidad del marco regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas previsto en la Ley General de Salud (ordenamientos impugnados en el presente juicio de amparo), **es la protección de la "salud" y el "orden público"**, puesto que de una interpretación sistemática del ordenamiento, así como de los distintos procesos de reforma a la ley, puede desprenderse que el legislador tuvo la intención de procurar la salud de los consumidores de drogas y proteger a la sociedad de las consecuencias perniciosas derivadas del consumo de las drogas, dado que se ha considerado que esta actividad tiene efectos nocivos tanto para el consumidor como para la sociedad en general, por tanto, ambas finalidades son constitucionalmente válidas, por lo tanto son necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional.

Lo anterior es así, en virtud de que en el caso en particular está demostrado científicamente que los efectos del consumo de Canabibis y/o THC, es perjudicial a la salud física y psíquica de las personas, por lo que prohibir su consumo y las actividades relacionadas con dicha planta, se encuentra válidamente justificada y necesaria para evitar el deterioro a la salud de las personas que la consumen y a la de los consumidores pasivos que inhalan el humo generado del consumo.

Asimismo, aun cuando el consumo de dicha droga sea un acto privado, no constituye un acto indiferente sino lesivo contra el bien común y desconocedor del interés general, por lo que la ley debe prohibirlo, para lograr los fines del Estado Social de Derecho, y evitar



vulnere la dignidad humana. Esto es así, ya que si bien, se puede afirmar que el individuo tiene derecho a hacer uso de su cuerpo como estime conveniente y que los derechos humanos están establecidos en la Constitución, lo cierto es que la libertad individual termina cuando comienza la de otra persona, de tal manera que las libertades e intereses individuales tienen como límite y sujeción el bien común y el supremo interés de la Nación.

Siendo importante resaltar que la prevención no consiste en autorizar de manera lícita la siembra, cosecha y comercialización de Cannabis Sativa L (Cáñamo) con FINES DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL para la obtención de canabidiol ó CBD, sino en disminuir, moderar, evitar y acotar el deterioro de la salud física, psicológica y social de los usuarios de dicha droga, entre los cuales se encuentran el quejoso.

Son proporcionales, porque el grado de la restricción sobradamente es recompensado por los efectos benéficos que tiene desde una perspectiva preocupada en garantizar la salud de la población en general y en especial la de los menores de edad.

Aunado a lo anterior, es necesario tomar en consideración:

- ✓ Que el derecho a la protección de la salud y el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, son garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a todo individuo, mismas que no pueden suspenderse ni restringirse.
- ✓ La gravedad del consumo de Cannabis y/o THC en México donde diariamente del 100% de las causas de fallecimiento de las personas, el 7 % son atribuibles al consumo de dicha droga (Según tabla de CONADIC/SSA/DGAE, Pág. 20), además de ocasionar un perjuicio contra la salud, el medio ambiente y el gasto en salud;
- ✓ Que el uso de los productos del cannabis constituye uno de los problemas más importantes de salud pública en el mundo, causando una gran proporción de mortalidad, morbilidad y discapacidad prevenibles.
- ✓ Que el humo de Cannabis y/o THC de segunda mano, compuesto por más de 6 mil sustancias tóxicas es una grave amenaza para la salud de los no fumadores expuestos, causando enfermedades graves en los adultos y, en particular, en los niños. (Información de CONADIC Pág. 44-45)
- ✓ Que la mayoría de los fumadores comienzan a fumar a una edad muy temprana, que no son conscientes del grado y de la naturaleza del daño causado por los productos de Cannabis y/o THC, y que debido a las propiedades adictivas de este y otros componentes son a menudo incapaces de dejar de fumar aun cuando estén sumamente motivados a hacerlo (dependencia).
- ✓ Que ningún país puede cubrir lo que cuesta el consumo de Cannabis y/o THC en vidas, así como en recursos financieros que podrían ser reorientados a un sinnúmero de otros problemas de salud urgentes que son menos prevenibles.





También, refiere que las autoridades estaban obligadas a respetar el derecho al debido proceso, audiencia, competencia de la autoridad y legalidad, agrega manifestando que no fue señalado en que consiste el parámetro de satisfacción, así como el porqué de la inclusión de "interés jurídico" e "interés legítimo", la razonabilidad en el empleo entre uno y otro interés y por qué dejó de tomar en cuenta la prevalencia del interés sustancial sobre las formalidades propias de uno y otro interés.

A lo anterior, primeramente cabe señalar que el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Cofepris, en la emisión del oficio **183300EL040837** de fecha 17 de diciembre de 2018, **no aplicó lo dispuesto en los artículos 83, 84, 85, 86 y siguientes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo**, dado que estos tienen el carácter de oficio simple de negativa por imposibilidad a la solicitud formulada a la autoridad, la cual se promovió como una petición simple.

En este orden, en relación a la procedencia del recurso de revisión cabe enunciar lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que a la letra refiere:

Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.

Del precepto en cita, se desprende que el recurso de revisión tiene como propósito resolver los actos y resoluciones de las autoridades como alternativa a la vía jurisdiccional, precisando que en términos de los artículos 85 y 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se promueve ante la autoridad que emitió el acto para que sea resuelto por su superior jerárquico, sin embargo, en el caso concreto se tiene que el quejoso primeramente presentaron solicitud ante la autoridad 183300EL040837, presentada el 29 de noviembre de 2018 y en consecuencia esta emitió el oficio que ahora se reclaman, por lo que resulta evidente que en estas actuaciones no fue emitido acto alguno con motivo del recurso de revisión, pues es hasta la emisión del oficio **183300EL040837** de fecha 17 de diciembre de 2018 emitido por el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Cofepris, cuando se emite el acto que pone fin al procedimiento administrativo, mismo que pudo haber sido combatido por el recurso de revisión, pero que se impugnó en la presente vía de amparo.

Así, en relación a los alcances y finalidad del recurso de revisión cabe enunciar el contenido de la jurisprudencia siguiente:



Tesis: 2a./J. 139/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 191656 88 de 104 Segunda Sala Tomo XI, Junio de 2000 Pag. 61
Jurisprudencia (Administrativa)

REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE LA OPCIÓN DE IMPUGNAR LOS ACTOS QUE SE RIGEN POR TAL ORDENAMIENTO A TRAVÉS DE ESE RECURSO O MEDIANTE EL JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

De la interpretación literal y sistemática de lo dispuesto en los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, así como de los antecedentes históricos que informan a este último numeral, se colige que al hacerse referencia en el primero de los preceptos mencionados a las "vías judiciales correspondientes" como instancia para impugnar los actos emitidos por las respectivas autoridades administrativas, el legislador tuvo la intención de aludir a un procedimiento seguido ante un órgano jurisdiccional, con independencia de que éste sea de naturaleza judicial, y cuyo objeto tenga afinidad con el recurso de revisión en sede administrativa, el cual se traduce en verificar que los actos de tales autoridades se apeguen a las diversas disposiciones aplicables; por otra parte, de lo establecido en el citado precepto de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se deduce que a través de él se incluyó dentro del ámbito competencial del referido tribunal el conocimiento de las controversias que surjan entre los gobernados y las autoridades administrativas cuya actuación se rige por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin que se condicionara la procedencia del juicio contencioso administrativo al agotamiento del citado recurso, máxime que la interposición de éste es optativa. En ese contexto, se impone concluir que los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que se rijan por ese ordenamiento, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, tienen la opción de impugnarlos a través del recurso de revisión en sede administrativa o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación; destacando que dentro de las vías judiciales correspondientes a que hizo referencia el legislador en el mencionado artículo 83 no se encuentra el juicio de garantías dado que, en abono a lo anterior, constituye un principio derivado del diverso de supremacía constitucional que las hipótesis de procedencia de los medios de control de constitucionalidad de los actos de autoridad, únicamente pueden regularse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la ley reglamentaria que para desarrollar y pormenorizar esos medios emita el legislador ordinario.

Reiterando lo anterior, cabe señalar de la jurisprudencia en cita lo siguiente:

1. Que los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que se rijan por ese ordenamiento, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, tienen la opción de impugnarlos a través del recurso de revisión en sede administrativa.
2. También, mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación; destacando que dentro de las vías judiciales correspondientes a que hizo referencia el legislador.





3. El mencionado artículo 83 no se encuentra el juicio de garantías dado que, en abono a lo anterior, constituye un principio derivado del diverso de supremacía constitucional que las hipótesis de procedencia de los medios de control de constitucionalidad de los actos de autoridad, únicamente pueden regularse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la ley reglamentaria que para desarrollar y pormenorizar esos medios emita el legislador ordinario.

En este contexto, se advierte por un lado que la petición del quejoso se encontraba encaminada a obtener una autorización para siembra, cosecha y comercialización de Cannabis Sativa L (Cáñamo) con FINES DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL para la obtención de canabidiol ó CBD, la cual si bien incide plenamente dentro de la esfera de competencia de la autoridad emisora del acto, lo cierto también es que la Ley General de Salud, no prevé una modalidad de ese tipo, por lo cual esta autoridad se ve impedida legalmente de atender dicho requerimiento.

Así, a diferencia de una determinación que resuelve si niega o autoriza la petición que ha sido formulado en relación al ámbito de competencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, fundando conforme a las disposiciones aplicables y expresando las razones en conjunción con esos preceptos que aplican en el caso concreto, el oficio reclamado en el presente juicio 183300EL040837 de fecha 17 de diciembre de 2018 emitido por el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Cofepris, se limitan a señalar que el quejoso no acreditó de forma fehaciente el interés legítimo que les asistía para solicitar ante la autoridad una autorización con las particularidades y alcances requeridos, por ello, se insiste que los argumentos tendientes a controvertir alguna política restrictiva resultan del todo INOPERANTES.

A efecto de abundar en lo anterior, se señala el contenido de la jurisprudencia siguiente:

Tesis: VI.2o. J/83 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 199822 26 de 28 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Diciembre de 1996 Pág. 267 Jurisprudencia (Común)

AGRAVIOS EN REVISIÓN. SON INATENDIBLES CUANDO SE REFIEREN A LA CUESTIÓN DE FONDO, SI SE IMPUGNA EL DESECHAMIENTO DE DEMANDA DE AMPARO. Cuando en la revisión se impugna la resolución mediante la cual el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo, considerando que existe una notoria causal de improcedencia, los agravios deben expresar razonamientos jurídicos que demuestren la ilegalidad de tal resolución, poniendo de manifiesto que los fundamentos y consideraciones del a quo son inexactas, precisando las disposiciones legales infringidas por la resolución recurrida; por tanto, si los agravios se limitan a proponer argumentos relacionados con el fondo de la controversia, dichos agravios deben calificarse de inatendibles, pues precisamente la improcedencia constituye un impedimento legal para analizar la cuestión de fondo.

Así, se reitera la Constitucionalidad de los actos reclamados consistentes en el **183300EL040837** de fecha 17 de diciembre de 2018 emitido por el Subdirector Ejecutivo



de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Cofepris, pues este se encuentra debidamente fundado y motivado, precisando que este no tiene por efecto aplicar precepto legal alguno, sino como resultado a la falta de acreditación del interés legítimo del quejoso para obtener la autorización peticionada, teniendo el carácter de tal determinación de negativa por imposibilidad que no se adentró al análisis del fondo del asunto.

PRUEBAS

1.- Instrumental de actuaciones.- En lo que a los intereses de mis representadas favorezca.

2.- Presuncional en su doble aspecto, Legal y Humana.- En lo que a los intereses de mi representada favorezca.

En mérito de lo antes expuesto:

A Usted C. Juez de Distrito, atentamente pido se sirva:

Primero.- Tener por rendido en tiempo y forma el informe justificado de ampliación de demanda solicitado.

Segundo.- En el momento procesal oportuno sobreseer el presente sumario constitucional o en su defecto negar la Protección de la Justicia Federal solicitada.

PROTESTO LO NECESARIO


MÓNICA TELLEZ ESTRADA

SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE NORMATIVIDAD

Subdirectora Ejecutiva de Normatividad de la Coordinación General Jurídica y Consultiva quien firma en suplencia por ausencia del Coordinador General Jurídico y Consultivo, de conformidad con lo establecido por los artículos 18 y 21, tercer párrafo, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y, el artículo Quincuagésimo Quinto, fracción IV del "Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010.

AMT/1792/Amp. 1833

Elaboró: 



2019
Año del Bicentenario de la Presidencia
de Emiliano Zapata